

Señores:

JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CALI – VALLE DEL CAUCA

REPARTO

E.S.D.

MEDIO DE CONTROL A INSTAURAR: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
CONVOCANTE: EPS SURAMERICANA S.A.
CONVOCADO: LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en este acto como apoderado especial de EPS SURAMERICANA S.A. de conformidad con poder especial otorgado por la Dra. DANIELA DIEZ GONZÁLEZ representante legal judicial de la compañía, calidad que acredito con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, respetuosamente solicito a su despacho se sirva citar a LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, persona jurídica del nivel central conforme a la división política administrativa del Estado, representada para los efectos de este acto por la doctora CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA, Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca), con el fin de formular el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la declaratoria de nulidad de los Actos Administrativos contenidos en la Resolución No. DESAJCLR21-2261 del 4 de octubre de 2021, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali; en la Resolución No. DESAJCLR21-2579 del 16 de noviembre de 2021, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali; y en la Resolución No. RH 0133 del 19 de enero de 2022 expedida por la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. DESAJCLR 21-2261 que a la fecha no ha sido notificada en debida forma a mi representada; y otros actos administrativos en los que pueda estar sustentada la decisión contenida en las disposiciones aquí citadas; adicionalmente solicito se ordene el correspondiente restablecimiento del derecho, lo cual formulo previas las siguientes consideraciones:

DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

DEMANDANTE:

- **EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.**, sociedad legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de Medellín, identificada con el Nit. 800088702-2, representada legalmente por la doctora DANIELA DIEZ GONZÁLEZ, mayor

de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.144.085.511; entidad que también se podrá llamar en este escrito por su sigla EPS SURA.

DEMANDADO:

- **LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, persona jurídica del nivel central, representada por el doctor JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ Director Ejecutivo de Administración Judicial y para los efectos de este asunto, por la doctora CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA, Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, conforme al numeral 7 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996.

PRETENSIONES

PRIMERA: Que se declare la nulidad total de los siguientes actos administrativos proferidos por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca) y por la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial, mediante los cuales esa entidad ordenó a la EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. - EPS SURA, el reintegro de la suma de dinero indicada adelante, de acuerdo con las instrucciones que ese acto administrativo impartió para efectuar la consignación de los respectivos valores, por concepto de aportes al sistema general de seguridad social en salud, prestaciones económicas derivadas de incapacidades y licencias de maternidad o paternidad, correspondientes a las vigencias 2015 y 2016; actos administrativos estos, contra los cuales se agotó la respectiva vía administrativa y por ende la nulidad debe comprenderlos a todos. Se trata de los siguientes:

1. Resolución No. DESAJCLR21-2261 del 4 de octubre de 2021, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, a través del cual se ORDENÓ a la EPS SURA, el reintegro del monto que asciende a VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS (\$28.643.187) M/Cte., por concepto de prestaciones económicas derivadas de incapacidades, licencias de maternidad y/o paternidad, así como también, el pago de los intereses moratorios causados de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 24 del decreto 4023 de 2011.
2. Resolución DESAJCLR21-2579 del 16 de noviembre de 2021, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición formulado contra la Resolución No. DESAJCLR21-2261.
3. RH 0133 del 19 de enero de 2022 expedida por la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, mediante la cual se resolvió

el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. DESAJCLR 21-2261 que a la fecha no ha sido notificada en debida forma a mi representada.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la citada declaratoria, se decrete como restablecimiento del derecho lo siguiente:

1. La suspensión de toda actuación administrativa, coactiva o judicial derivada de los Actos Administrativos aquí impugnados, precisando que ni la Resolución DESAJCLR21-2261 del 4 de octubre de 2021, ni ninguno otro en que se hubiere sustentado la decisión ahí advertida, hace las veces de título ejecutivo y en consecuencia, de ningún modo resultaría viable su cobro mediante la vía judicial o coactiva, por lo que ruego se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, abstenerse de librar mandamiento de pago de los actos impugnado.
2. Prevenir a la convocada para que dé estricto cumplimiento a la sentencia que se profiera en el marco de este litigio, de conformidad a los artículos 187 y ss. de la ley 1437 de 2011.

HECHOS

PRIMERO: El 29 de enero de 2019 la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, expidió la Resolución No. DESAJCLR21-2261 del 4 de octubre de 2021, cuyo artículo primero ordenó a mi representada, EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A., el reintegro de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS (\$28.643.187) M/Cte., por concepto del supuesto adeudo de prestaciones económicas derivadas de incapacidades, licencias de maternidad y/o paternidad.

SEGUNDO: La Resolución No. DESAJCLR21-2261, fue oportunamente recurrida y subsidiariamente apelada por la EPS SURA, mediante escrito radicado en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, el día 19 de octubre de 2021, a través del cual, la EPS por conducto del suscrito apoderado, manifestó su contundente oposición frente a la existencia de los valores adeudados por concepto de prestaciones económicas relacionadas con incapacidades y licencias de maternidad o paternidad, refiriéndose concretamente frente a cada una de las relacionadas en el Acto impugnado.

En el escrito mediante el cual se formularon los recursos aludidos, se informó que la dirección autorizada para recibir notificaciones, sería notificaciones@gha.com.co.

TERCERO: El 12 de abril de 2022, mi representada recibió el documento identificado con la siguiente nomenclatura: DESAJCLR21-2579 del 16 de noviembre de 2021, en la dirección electrónica notificaciones@gha.com.co.

CUARTO: El 23 de noviembre de 2021, mi representada recibió el documento identificado con la siguiente nomenclatura: DESAJCLGCC22-1888 del 29 de marzo de 2022, en la dirección electrónica notificacionesjudiciales@epssura.com.co, misma que figura registrada en cámara de comercio, con el propósito de recibir notificaciones.

El asunto de la comunicación es el siguiente: “cobro persuasivo Recobro e incapacidad No. 76001129000020220007100”. En el contenido se indica que la Resolución No. DESAJCLR21-2261, quedó ejecutoriada y en firme el pasado 25 de enero de 2022. No obstante, hasta ese momento, mi representada desconocía los actos administrativos que habían resuelto los recursos oportunamente formulados contra dicho acto.

DISPOSICIONES JURÍDICAS VULNERADAS

Las normas que se vulneraron con los Actos Administrativos aludidos son los siguientes:

- La Constitución Política de Colombia (artículos 29 y siguientes).
- Ley 270 de 1996 (artículos 103 y siguientes).
- Decreto 1804 de 1999.
- Ley 712 de 2001 (artículo 2 numeral 4 y siguientes).
- Ley 1122 de 2007 (artículo 41).
- Decreto 019 de 2010 (artículo 121).
- Ley 1438 de 2011 (artículo 126 literal g).
- Decreto 4023 de 2011 (artículos 12, 24 y siguientes).
- Decreto 2353 de 2015 (artículos 78 y siguientes).
- Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
- Jurisprudencia de la Corte Constitucional vigente en materia de recobro de prestaciones económicas derivadas de incapacidades, licencias de maternidad y/o paternidad.

Cabe aclarar que dando alcance a lo consagrado en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA, el concepto de la violación de cada una de las normas aquí citadas se encuentra en el acápite inmediatamente siguiente.

CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. FALSA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN LAS RESOLUCIONES: No. DESAJCLR21-2261, DESAJCLR21-2579, RESOLUCIÓN No. RH 033.

En primer lugar, es preciso recordar que la Constitución Política en su artículo 29, consagra el derecho fundamental al debido proceso, el cual debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Derivado de lo anterior, los actos administrativos tienen presupuestos de existencia y validez so pena de ser declarados nulos conforme al artículo 138 del C.P.A.C.A. Estos elementos son clasificados en internos y externos. Los primeros se refieren a las formalidades que debe tener todo acto administrativo y los segundos, pretenden dar a conocer los motivos, objeto y finalidad del mismo, circunstancias que permiten al administrado controvertir o acoger lo expresado en él.

La exposición de motivos es una exigencia que se deriva del debido proceso y el derecho de defensa que garantiza la transparencia del ejercicio de la actividad pública, y permite al afectado conocer lo que se pretende con el acto notificado. En consonancia con ello, el artículo 42 del C.P.A.C.A. dispuso al respecto:

*“Artículo 42. Contenido de la decisión. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, **se tomará la decisión que será motivada.**”*

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos.”

De conformidad con el artículo citado, los actos administrativos que contengan decisiones que afecten a los particulares deben motivarse al menos de forma sumaria, pues el análisis de los hechos y razones que fundamentan la decisión, garantiza el derecho de defensa y de audiencia en contra de quien se profiere la providencia y enmarcan en este caso, el contenido de la discusión. Por lo tanto, los motivos de los actos administrativos constituyen un elemento estructural y su ausencia o la falsa motivación generan la nulidad del acto, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 del C.P.A.C.A.

Sobre esta causal de anulación el Consejo de Estado ha precisado que: *“(…) es el vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo, es decir, que las razones expuestas por la Administración al tomar la decisión, sean contrarias a la realidad. La causa o motivo de los actos administrativos (elemento causal) se conforma de los fundamentos de hecho y de derecho que son los que determinan la decisión que la Administración adopta, así cuando existe falsa motivación, se entiende que la sustentación fáctica en que se apoya no corresponde a la realidad.”¹*

Ahora bien, descendiendo al caso de estudio, encontramos que la Resolución No. DESAJCLR21-2261, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, estableció sus cimientos entre otras, en el requerimiento que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, realizó a las Seccionales para que procedieran a verificar y depurar el inventario de las incapacidades pendientes por cobrar tanto a las EPS como a las ARL. Señala la Seccional Cali, que de su validación concerniente a las vigencias 2017 y 2018, encontró que la EPS SURA, le

¹ Sentencia del 8 de febrero de 2007, expediente 15298, CP. María Inés Ortiz Barbosa.

adeuda prestaciones económicas derivadas de incapacidades y licencias de maternidad y/o paternidad, el valor de \$28.643.187 M/cte.

De todo lo descrito, claro resulta que a pesar de haberse relacionado en el citado acto las prestaciones económicas supuestamente adeudadas por parte de la EPS SURA, dicha relación no da cuenta de la fecha efectiva en que las mismas fueron radicadas ante esta última para efectos de obtener su pago, por lo cual hasta tanto no se acredite la radicación cierta de la incapacidad y/o licencia, a mi prohijada no le es exigible ningún tipo de pago relacionado con ellas, pues de conformidad con el tantas veces comentado artículo 24 del decreto 4023 de 2011, dicha obligación nace para la EPS, previa solicitud de reconocimiento, revisión, liquidación y posterior autorización de lo solicitado, como me permito citar:

“Artículo 24. Pago de prestaciones económicas. *A partir de la fecha de entrada en vigencia de las cuentas maestras de recaudo, los aportantes y trabajadores independientes, no podrán deducir de las cotizaciones en salud, los valores correspondientes a incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad y/o paternidad.*

El pago de estas prestaciones económicas al aportante, será realizado directamente por la EPS y EOC, a través de reconocimiento directo o transferencia electrónica en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la autorización de la prestación económica por parte de la EPS o EOC. La revisión y liquidación de las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas se efectuara dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud del aportante.

En todo caso, para la autorización y pago de las prestaciones económicas, las EPS y las EOC deberán verificar la cotización al Régimen Contributivo del SGSSS, efectuada por el aportante beneficiario de las mismas.

Parágrafo 1°. *La EPS o la EOC que no cumpla con el plazo definido para el trámite y pago de las prestaciones económicas, deberá realizar el reconocimiento y pago de intereses moratorios al aportante, de acuerdo con lo definido en el artículo 4° del Decreto 1281 de 2002.*

Parágrafo 2°. *De presentarse incumplimiento del pago de las prestaciones económicas por parte de la EPS o EOC, el aportante deberá informar a la Superintendencia Nacional de Salud, para que de acuerdo con sus competencias, esta entidad adelante las acciones a que hubiere lugar.” (Énfasis propio)*

En este orden de ideas, se avizora que la Resolución objeto de debate se encuentra falsamente motivada, como quiera que la Dirección Ejecutiva Seccional de Cali, no evidenció haber surtido de su parte, el trámite legalmente establecido para efectos de obtener el pago de prestaciones económicas ante la EPS SURA, sino que por el contrario, pareciera haber obviado dicho trámite y en su lugar, haber dado paso a la expedición de un acto administrativo, ordenándole el pago de

lo que a su juicio le adeudada por concepto de las citadas prestaciones, sin que su motivación refleje el ajuste a las disposiciones reguladoras del proceso de cobro.

Sumado a lo anterior, se alude una falsa motivación del acto administrativo contenido en la Resolución No. DESAJCLR21-2261, como quiera que, para la fecha de su expedición, varias de las prestaciones ahí relacionadas ya habían sido pagadas por mi procurada, circunstancia que se traduce en una disparidad entre la realidad fáctica y el supuesto de hecho en que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, baso su orden de pago a la EPS SURA. Sobre lo anterior, se llamó la atención del aportante a través del recurso de reposición en subsidio apelación, formulado por mi prohijada frente al citado acto administrativo, en el que explicó con suficiencia las razones por las cuales, el reconocimiento y pago de las prestaciones reclamadas es improcedente, muchas ya habían sido pagadas y otras no cumplían con el lleno de los requisitos legales.

Así las cosas, se tiene que a la fecha de expedición del acto administrativo, no sólo existían prestaciones efectivamente pagadas, sino que aquellas que se encontraban pendientes de pago, obedecían a su falta de radicación, inexistencia en el sistema (lo cual ocurre cuando la incapacidad ni siquiera ha sido transcrita por la EPS, es decir que la expidió un agente externo), o que se encontraban tramitadas y autorizadas, próximas a pagarse. Lo anterior fue acogido parcialmente por la Dirección Ejecutiva Seccional, quien resolvió el recurso de reposición formulado, a través de la Resolución RH 033 SURA EPS, decidiendo modificar el monto de lo supuestamente adeudado por mi representada a \$28.643.187.

Narrado lo anterior, es menester traer a colación la jurisprudencia del H. Consejo de Estado referente a la causal de nulidad que aquí nos ocupa, la cual ha consignado:

*“[L]os vicios invalidantes del acto administrativo tienen una relación directa con sus elementos. En otras palabras, la ausencia o la insuficiencia de alguno de tales elementos, comprometen la validez de la decisión administrativa y están llamados a determinar su expulsión del ordenamiento jurídico mediante la declaratoria de su nulidad en sede judicial. Ahora bien, en cuanto la motivación como elemento del acto administrativo, esta se entiende como la expresión de los móviles que impulsaron al titular de la función administrativa a adoptar determinada decisión. Comporta los fundamentos de hecho y de derecho que la autoridad ha debido tener en cuenta para pronunciarse en uno u otro sentido. En ese orden, los fundamentos de hecho constituyen los supuestos fácticos en los que se soporta la decisión, mientras los de derecho vienen a ser los cimientos de orden constitucional y legal que sirvieron de base a la autoridad para decidir determinado asunto. Siguiendo con el hilo de lo expuesto, es necesario puntualizar que **se habla de “falsa motivación” cuando se presenta una desconformidad entre la realidad fáctica y jurídica que ha debido servir de fundamento al acto y los fundamentos fácticos y jurídicos que finalmente quedaron consignados en la decisión administrativa.**”²(Énfasis propio)*

² CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA. Consejero ponente, Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ. Bogotá, D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001-03-25-000-2016-00019-00(0034-16)

En definitiva, desde ya, resulta contundente la disconformidad entre la realidad fáctica que debió servir de respaldo para la expedición y confirmación del acto administrativo, y el fundamento fáctico y jurídico del que se valió la Seccional para motivarlo, pues los postulados en que sienta las bases de la orden de pago, no guardan correspondencia alguna con el trámite al que legalmente debe ceñirse para el reconocimiento y pago de prestaciones económicas causadas por funcionarios de la rama judicial.

Por otro lado, es menester traer a colación que a renglón seguido de lo precitado, la Resolución impugnada, continuó su fundamentación jurídica haciendo alusión a las facultades otorgadas por el Estatuto de la Administración de Justicia, ley 270 de 1996, especialmente en su artículo 103, al Director Seccional de la Rama Judicial, de las cuales señala las siguientes:

“ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. <Ver Notas del Editor> *Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes funciones:*

(...)

2. *Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.*

(...)

6. *Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.”*

De lo anterior, se desprende con absoluta claridad que el rol que cumple un Director Seccional de la Rama Judicial, es el de **administrador**, calidad que lo hace responsable de la destinación que determine para los recursos que administra. En este orden de ideas, es preciso traer a colación la definición que la Real Academia de la Lengua Española, ha dispuesto para el verbo administrar:

“administrar.

Del lat. administrāre.

(...)

3. tr. *Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes.”*³

Así entonces, no cabe la menor duda de que la función de administrar concerniente al Director Ejecutivo Seccional de Cali, doctor José Mauricio Cuestas Gómez, lo faculta para organizar y disponer los recursos propios de la Seccional, de modo que se cumpla con la ejecución de lo presupuestado en forma eficiente, luego dicha calidad de administrador, no debe interpretarse como la potestad de ORDENAR a un particular el reintegro de un presunto adeudo, sin un debido proceso que le permita exponer los motivos con base en los cuales se acepta o se objeta dicho cobro. Máxime, en tratándose de asuntos que atañen al reconocimiento y pago de prestaciones

³ Real Academia de la Lengua Española. <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=administrar>

económicas, cuya competencia para conocer y decidir, corresponde exclusivamente a la Superintendencia Nacional de Salud en uso de sus facultades jurisdiccionales, o a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, como se explicará en un acápite posterior.

Entonces bien, para efectos de concluir el presente reparo contra el Acto impugnado, es oportuno indicar que la norma en que se sustenta la Seccional Cali para expedirlo, de ninguna forma consagra prerrogativa expresa que lo faculte para ordenar el reintegro de recursos consistentes en prestaciones económicas, por lo que la motivación plasmada en el acto es abiertamente falsa, no guardando correspondencia alguna con la potestad que pretende justificar, circunstancia que desencadena en que a todas luces el Acto se torne arbitrario y manifiestamente injusto, haciéndose necesario proceder de inmediato con su inminente nulidad.

Ahora, continuando con lo concerniente a la Resolución mediante la cual la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial, resolvió el recurso de reposición formulado por la EPS SURA, es preciso decir que, la Dirección incurrió en una evidente falsa motivación como quiera que pese a consignar en el Acto los fundamentos jurídicos que regulan el trámite de reconocimiento y pago de incapacidades y licencias de maternidad y/o paternidad, les otorgó un alcance completamente equivocado, que de ninguna manera corresponde con la realidad fáctica como lo es la expedición de una orden de pago en favor de la Rama Judicial; Así mismo, la Resolución en comento incurrió en falsa motivación al reiterar que el fundamento de su decisión, se consagra en la Ley 270 de 1996, indicando que a su juicio, ésta le otorga a la entidad la supuesta potestad de expedir Actos con vocación de ordenar el reintegro de supuestos valores adeudados, situación que como se explicó con precedencia no tiene asidero alguno, pues lo cierto es que la norma en comento no contempla disposición expresa alguna que faculte al Director Seccional de la Rama Judicial, para ordenar ningún tipo de pago, mucho menos los provenientes de aportes al SGSS, ni aquellos relacionados con prestaciones económicas derivados de licencias de incapacidades, licencias de maternidad y/o paternidad.

Señalado lo anterior, sea oportuno profundizar en las razones que cimientan la falsa motivación aludida, indicando que si bien es cierto el ordenamiento jurídico impone a los empleadores el deber de gestionar el reconocimiento y pago de prestaciones económicas derivadas de incapacidades y licencias de maternidad y/o paternidad, también lo es que, dicha obligación no implica de ninguna manera la potestad de ordenar a las promotoras de salud, reintegros por dichos conceptos, pues como bien lo dispone el artículo 121 del decreto 019 de 2012, para que proceda el pago de la prestación, es menester que como primera medida, la EPS la reconozca, previa radicación de las incapacidades y/o licencias por parte del empleador:

“ARTÍCULO 121. TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD. *El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá ser adelantado, de manera directa, por el empleador ante*

las entidades promotoras de salud, EPS. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento.”

Así entonces, se tiene que una vez reconocida la incapacidad por parte de la EPS, será procedente su pago conforme las disposiciones legales que para el efecto se contemplan, al respecto el artículo 24 del decreto 4023 de 2011, señala:

“Artículo 24. Pago de prestaciones económicas. A partir de la fecha de entrada en vigencia de las cuentas maestras de recaudo, los aportantes y trabajadores independientes, no podrán deducir de las cotizaciones en salud, los valores correspondientes a incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad y/o paternidad.

El pago de estas prestaciones económicas al aportante, será realizado directamente por la EPS y EOC, a través de reconocimiento directo o transferencia electrónica en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la autorización de la prestación económica por parte de la EPS o EOC. La revisión y liquidación de las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas se efectuara dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud del aportante.

En todo caso, para la autorización y pago de las prestaciones económicas, las EPS y las EOC deberán verificar la cotización al Régimen Contributivo del SGSSS, efectuada por el aportante beneficiario de las mismas.” (Énfasis propio)

De la norma transcrita, se desprende la obligación de pago colocada a cargo de la EPS y en favor del aportante, en el *sub exámine*, del empleador Rama Judicial, en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores **a su reconocimiento**, para cuyo efecto, la incapacidad o licencia radicada, debe ser estudiada en aras de verificar que el afiliado cumpla con el lleno de los requisitos establecidos en la ley para que se haga viable el reconocimiento de la prestación. En este orden de cosas, claro resulta que el alcance que merece lo normado es el descrito y no otro; sin embargo, es lamentable la confusión en que incide la Dirección Ejecutiva Nacional al tomar las disposiciones citadas, como fundamento admisible y suficiente para la expedición del Acto contentivo de una orden de pago sin que siquiera se evidenciara el agotamiento del proceso explicado.

Sobre el particular, me permito hacer especial hincapié, en que una cosa es la gestión de reconocimiento y pago de prestaciones económicas a la que ineludiblemente está obligado el empleador, y otra muy diferente, es la posibilidad de ejecutar una obligación a través de un acto administrativo sin siquiera acudir a la gestión de reconocimiento de incapacidades y/o licencias; así pues, el sustento normativo plasmado en el Acto impugnado, lo que consagra es la obligación de gestionar el reconocimiento y cobro; no obstante, mediante la Resolución objeto de debate, la Dirección Ejecutiva Nacional, más que dicha gestión de reconocimiento, pretendió arbitrariamente ejecutar unos supuestos adeudos sin que siquiera pudieran ser objeto de revisión por mi procurada, pues si bien es cierto, concedió los recursos de reposición en subsidio apelación

contra el Acto expedido, también lo es que: (i) ese no es el procedimiento contemplado en la ley para la validación juiciosa de cada una de las incapacidades y/o licencias reclamadas y (ii) la Dirección no está en la facultad de expedir Resoluciones de esa índole pues no existe una sola norma en el ordenamiento jurídico que expresamente le conceda tal atribución.

Así las cosas, resulta desafortunado el análisis realizado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial respecto de las citadas normas, pues las mismas no asignan a la Rama Judicial la facultad de expedir órdenes de pago de aportes al SGSSS, ni de prestaciones económicas, por lo que es dable reiterar la discrepancia que existe entre la situación fáctica narrada y la fundamentación jurídica con que pretende soportarse, de tal suerte que, nuevamente se ratifica la falsa motivación de la que se dotó a los Actos Administrativos recurridos, siendo a todas luces nulos conforme a lo señalado en el artículo 137 del CPACA.

Ahora bien, por su parte, también es menester advertir que la Dirección Ejecutiva Nacional, incurrió en falta de motivación frente al reparo expresado por mi procurada en el recurso de apelación, denominado *“INEXISTENCIA DE FUENTE SUSTANCIAL DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS”* por concepto de prestaciones derivadas de incapacidades y licencias de maternidad y/o paternidad para las vigencias 2013, 2014 y con corte a septiembre de 2015, de conformidad con el cual, la EPS SURA, manifestó que no adeuda suma de dinero alguna a la Dirección de Administración Judicial, por concepto de reintegros. Lo anterior, como quiera que la Dirección Nacional, no consideró en ninguno de los apartes de la Resolución DESAJCLR21-2579, los argumentos esgrimidos al respecto, lo que inevitablemente desencadena en una clara ausencia de motivación del acto administrativo que se ataca, frente a uno de los reparos argüidos en el recurso, por lo que no le resultaba dable al despacho proferir decisión de fondo, confirmando la decisión recurrida.

De todo lo expuesto, se colige que la Compañía EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A., fue objeto de una medida arbitraria por parte de LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL, toda vez que los Actos impugnados, no encuentran sustento normativo alguno que haga viable su expedición, pretendiendo dar un alcance erróneo, a normas que como empleador, le imponen el deber de gestionar el reconocimiento y pago de prestaciones económicas, más no lo facultan para ordenar su pago, extralimitándose en sus funciones conforme al artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, y saltándose el procedimiento legal contemplado para ello, de modo que, la situación descrita no nos deja otro camino que concluir la falsa motivación que revisten los Actos atacados, para nacer a la vida jurídica y producir los efectos esperados.

2. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE IMPUGNAN SE EXPIDIERON CON VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DE MI PROCURADA.

Sea lo primero recordar, que el máximo órgano de la jurisdicción Contencioso Administrativa ha señalado que el debido proceso implica materializar un juzgamiento conforme a las leyes

preexistentes, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la publicidad del juicio, la proscripción de dilaciones injustificadas, la controversia probatoria, la impugnación del acto y la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

De igual forma, se ha expuesto por parte de dicha Corporación, que el derecho de Defensa implica que el acto acusado no desconozca el artículo 29 de la Constitución Política, de tal forma que se tenga la oportunidad de exponer las diferentes opiniones y reclamos en procura de controvertir determinada decisión.

Como se mostró en el inicio del acápite anterior, el derecho fundamental al debido proceso, debe encontrarse en todas las actuaciones desplegadas por parte de la administración. En tal sentido, los actos administrativos deben exponer los motivos, objeto y finalidad de los mismos a fin de que los interesados puedan controvertir lo manifestado dentro de los mismos. La ausencia de tales elementos, que se circunscriben a los requisitos de validez, deriva en una violación del debido proceso y derecho de defensa, puesto que no permite a los administrados conocer las motivaciones reales del acto notificado y además imposibilita el ejercicio idóneo y eficaz del derecho de defensa.

En esa medida, valga anotar que el acto administrativo impugnado, si bien es cierto fue modificado y ajustado en cuanto al valor que se ordenó pagar a mi procurada, reconociendo la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial que varias de las prestaciones relacionadas en su contenido, habían sido pagadas con anterioridad a su expedición; no lo es menos, que ni la Dirección Seccional, ni la Nacional, se pronunciaron frente a las prestaciones que la EPS SURA reseñó como inexistentes, no radicadas y tramitadas, de suerte que ante la falta de pronunciamiento sobre este particular a mi procurada le fue cercenado el derecho a sustentar ante el superior un argumento adicional o diferente a lo ya expuesto, y se insiste en que el proceder de la entidad fue arbitrario y violatorio del debido proceso, toda vez que pese a la ausencia de cualquier pronunciamiento frente a las consideraciones expuestas por mi representada, confirmó la decisión de preservar la orden de pago expedida mediante la Resolución cuya nulidad se pretende.

En este orden de ideas, se tiene que a pesar de que la Dirección Seccional concedió los recursos de reposición en subsidio apelación a mi prohijada, también lo es que, con ello no le garantizó la contradicción y defensa efectiva de sus intereses, pues el acto a apelar se encontraba incompleto, sin manifestación alguna frente a las prestaciones económicas que según la juiciosa validación realizada por la EPS SURA, no figuraban dentro del sistema, o registraban como no radicadas o tramitadas, y en tal medida, a mi procurada le fue imposible plantear nuevos argumentos frente a la orden de pago confirmada primigeniamente por la Seccional. No obstante, mi procurada procedió con la interposición de los recursos en la oportunidad concedida, poniendo de presente las aclaraciones del caso frente a cada prestación, así como también la falta de competencia que le asistía a la entidad para expedir Actos de la índole comentada, sin que lo argüido hubiese recibido una respuesta concreta y de fondo frente a los reparos formulados, procediendo a

confirmar la decisión de ordenar el pago de los citados conceptos, mediante el Acto Administrativo Impugnado.

Interpuestos los recursos, los mismos fueron resueltos en perjuicio de mi representada, modificando el Acto Administrativo impugnado solo en cuanto al monto de lo aparentemente adeudado y dejando en firme la supuesta obligación en él contenida, sin que mediara una sola manifestación respecto a las prestaciones: inexistentes, no radicadas y tramitadas.

Obsérvese entonces, como la Dirección Seccional vulneró el derecho de defensa y contradicción de mi procurada pues en sede administrativa, al no motivar la decisión de mantener incólume la orden de pago pese a la explicación de que el monto solicitado, corresponde a prestaciones que no existían en el sistema, o no figuran radicadas o ya estaban tramitadas pendientes de pago, no garantizó efectivamente su derecho a ejercitar una defensa de fondo, pues sin una sola consideración al respecto, tanto la Seccional como la Nacional confirmaron la orden de pago contenida en la Resolución No. DESAJCLR21-2261.

Finalmente, reitero, como se mostró en el acápite anterior, que la Rama Judicial expidió los actos administrativos que se atacarán en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin la suficiente motivación ni argumentación requerida para su expedición, lo que devine en una clara violación del derecho de defensa y el debido proceso de mi representada, puesto que no permitió que se ejerciera una defensa técnica eficaz respecto de la emisión de estos.

3. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN LAS RESOLUCIONES: No. DESAJCLR21-2261, DESAJCLR21-2579, RESOLUCIÓN No. RH 033, SE EXPIDIERON CON VIOLACIÓN DE NORMAS SUPERIORES.

El artículo 137 del C.P.A.C.A. consagra, entre otras causales de nulidad, aquella derivada de la infracción de las normas en que ha debido fundarse el acto administrativo o mejor, la nulidad por violación de una norma superior, como se conoce genéricamente a esta causal de nulidad. La contravención legal a la que hace referencia la misma, debe ser directa y ocurre cuando se configura una de las siguientes situaciones tal como se ha pronunciado el Consejo de Estado:

“(...) i) falta de aplicación, ii) aplicación indebida o, iii) interpretación errónea. Según la doctrina judicial del Consejo de Estado, ocurre la primera forma de violación, esto es, la falta de aplicación de una norma, ya porque el juzgador ignora su existencia, o porque a pesar de que conoce la norma, tanto que la analiza o sopesa, sin embargo, no la aplica a la solución del caso. También sucede esa forma de violación cuando el juez acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el espacio. En los dos últimos supuestos, el juzgador puede examinar la norma pero cree, equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que resuelve, evento en el cual se está ante un típico caso de violación por falta de aplicación, no de interpretación errónea, en razón de que la norma por no haber sido aplicada no trascendió al caso. Se presenta la

segunda manera de violación directa, esto es, por aplicación indebida, cuando el precepto o preceptos jurídicos que se hacen valer se usan o se aplican a pesar de no ser los pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión. El error por aplicación indebida puede originarse por dos circunstancias: 1.- Porque el juzgador se equivoca al escoger la norma por inadecuada valoración del supuesto de hecho que la norma consagra y 2.- Porque no se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto. Y, finalmente, se viola la norma sustancial de manera directa, cuando ocurre una interpretación errónea. Sucede cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero el juzgador los entiende equivocadamente, y así, erróneamente comprendidos, los aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde”⁴

De acuerdo con la anterior clasificación de las modalidades en las cuales puede ocurrir dicha causal de nulidad, se mostrará respecto de las siguientes normas, las circunstancias en las que se configura la mentada causal:

❖ **Aplicación indebida del Artículo 103 de la Ley 270 de 1996, dentro de los actos administrativos impugnados:**

Como se explicó en acápite precedente, los Actos impugnados están orientados a constituir en contra mi representada una **orden de pago** por concepto de prestaciones económicas derivadas de incapacidades y licencias de maternidad y/o paternidad, causadas por funcionarios de la Rama Judicial, durante las vigencias 2015 y 2016.

Ahora bien, tanto la Dirección Ejecutiva Seccional de Cali, como la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial, en aras de fundamentar su facultad para expedir un Acto de dicha índole, incluyeron dentro de la motivación jurídica de los Actos objeto de reproche, las potestades que les otorga el artículo 103 de la ley 270 de 1996, como a continuación cito:

“ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. <Ver Notas del Editor> *Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes funciones:*

1. Ejecutar el Plan Sectorial y las demás políticas definidas para la Rama Judicial.

2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.

⁴ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejero ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas Bogotá, D.C., Quince (15) de Marzo de dos mil doce (2012) Radicación número: 25000-23-27-000-2004-92271-02(16660).

3. Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse, conforme a los actos de la delegación que expida el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

(...)

7. Representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales.”

Así pues, estudiado lo anterior, resulta perfectamente entendible que la intención del legislador al expedir la disposición citada fue conferir a los Directores Seccionales de la Rama Judicial la calidad de administradores de los recursos propios de su Sección, para lo cual les es dable organizar y destinar el presupuesto propio de ésta a efectos de garantizar el correcto funcionamiento de la Rama Judicial; luego, de la norma transcrita a ninguna luz se entiende, que su contenido otorgue a la Dirección Seccional, facultades para ordenar a particulares pagos o reintegros de presuntos adeudos, inobservando trámites regulados en otras disposiciones con miras a obtener lo propio.

Sin embargo, la interpretación realizada por las Direcciones referidas, consistió en otorgar a dicha disposición, un alcance que a todas luces excede el límite de las funciones administrativas contempladas para aquellos funcionarios que fungen como Directores Seccionales de la Rama Judicial, atribuyéndoles en virtud de las competencias expresamente enlistadas, la facultad de expedir un Acto Administrativo con mérito de ordenar un pago, facultad que como es claro, ni se contempla dentro de las funciones atribuidas por la norma, ni mucho menos debe admitirse como el resultado de una interpretación asertiva de la misma, por lo que es oportuno señalar una extralimitación en las funciones de la Dirección Seccional de la Rama Judicial de Cali, circunstancia que le está expresamente prohibida por la Constitución Política, como a continuación cito:

“ARTICULO 6o. *Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.”*

En tal medida, se tiene que evidentemente, las Direcciones Ejecutivas incurrieron en una indebida aplicación del artículo 103 de la ley 270 de 1996, toda vez que dicho **precepto no resulta pertinente** para sustentar la facultad de proferir un Acto Administrativo que comporte la orden de un pago o reintegro por concepto de prestaciones económicas que devengan de incapacidades y/o licencias.

Consecuentemente, desde ya, se advierte una fehaciente vulneración del Estatuto de la Administración de Justicia, ley 270 de 1996, artículo 103.

❖ **Interpretación errónea del artículo 121 del decreto 019 de 2010 y del artículo 24 del decreto 4023 de 2011, dentro de la Resolución No. 8931 de 30 de diciembre de 2016:**

Contrario a lo anterior, debo señalar que la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. DESAJCLR 19-174, trajo a colación dos normas fundamentales, pertinentes y completamente aplicables al caso que nos ocupa; sin embargo, la Rama Judicial, les dio un alcance completamente equivocado al que realmente corresponde.

Obsérvese entonces lo normado por cada disposición, haciendo un análisis de la interpretación que merece cada una de ellas, cotejándola con aquella otorgada por la Dirección Nacional. Así pues, por una parte, el artículo 121 del Decreto 019 de 2012, reza:

“ARTÍCULO 121. TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD. El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá ser adelantado, de manera directa, por el empleador ante las entidades promotoras de salud, EPS. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento.

Para efectos laborales, será obligación de los afiliados informar al empleador sobre la expedición de una incapacidad o licencia.”

De lo anterior, se desprende la obligación que le asiste al empleador para gestionar el reconocimiento de incapacidades de origen común y licencias de maternidad y/o paternidad, ante las Empresas Promotoras de Salud, lo que de ningún modo le asigna la potestad para ordenar el pago de una prestación económica sin sujetarse a un meridiano trámite de verificación por parte de quien está llamado a reconocerla. Todo lo contrario, el espíritu de la norma exige que el empleador o aportante al Sistema **agote dicho trámite de validación**, en aras de que con posterioridad a su culminación se determine la procedencia o improcedencia del pago.

Ahora, descendiendo al caso concreto, resulta indiscutible el yerro en que incurre la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial al justificar el Acto reprochado, con base en la obligación de gestionar el reconocimiento de la prestación, pues es del todo evidente que dicho deber en nada se relaciona con una eventual potestad de ordenar reintegros o pagos, sin observancia al trámite de reconocimiento.

Por otro lado, valga citar lo consagrado en el artículo 24 del Decreto 4023 de 2011, que al respecto del pago de prestaciones económicas dispone:

“Artículo 24. Pago de prestaciones económicas. A partir de la fecha de entrada en vigencia de las cuentas maestras de recaudo, los aportantes y trabajadores independientes, no

podrán deducir de las cotizaciones en salud, los valores correspondientes a incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad y/o paternidad.

El pago de estas prestaciones económicas al aportante, será realizado directamente por la EPS y EOC, a través de reconocimiento directo o transferencia electrónica en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la autorización de la prestación económica por parte de la EPS o EOC. La revisión y liquidación de las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas se efectuará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud del aportante.

En todo caso, para la autorización y pago de las prestaciones económicas, las EPS y las EOC deberán verificar la cotización al Régimen Contributivo del SGSSS, efectuada por el aportante beneficiario de las mismas.” (Énfasis propio)

De la norma en cita se concluye que existe un trámite regulado para que por una parte, los empleadores adelanten la gestión de reconocimiento de prestaciones económicas causadas por sus trabajadores, y por la otra, para que las EPS puedan proceder con el pago de las mismas; sin embargo, las Direcciones Ejecutivas por ningún medio evidenciaron haber agotado el trámite mencionado, sino que se limitaron a enunciar el envío de oficios encaminados a solicitar el pago de las prestaciones supuestamente adeudadas, de los cuales no aporta constancia de entrega alguna, ni mucho menos de su contenido, para efectos de verificar que contaran con un detalle de lo solicitado, haciendo viable su estudio.

No obstante, hago especial hincapié, en que el trámite de radicación de incapacidades y/o licencias, predeterminado por la EPS Y MEDICINA PREPADADA SURAMERICANA S.A., se debe llevar a cabo a través del portal del empleador dispuesto en la página web www.epssura.com/empleadores, como se indicó en respuesta a los únicos oficios recibidos por mi procurada.

Finalmente, es preciso concluir que, si bien es cierto las citadas normas imponen a los empleadores la obligación de gestionar el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas causadas por sus empleados, a su vez que a las EPS les asigna la obligación de reconocerlas y pagarlas directamente al empleador siempre que resulte ello procedente, también lo es que, a dichas potestades claras y expresas no le es dable una interpretación que implique la expedición simple y llana de un Acto que ordene el pago de incapacidades y/o licencias de maternidad o paternidad, por lo cual, es indiscutible que la Dirección Ejecutiva Nacional incurrió en una interpretación errónea de la normativa citada, pues les otorgó un alcance extralimitado que no corresponde, al sostener que en virtud del deber de gestión de reconocimiento, le era atribuible ordenar el pago de lo que considera adeudado mediante Acto Administrativo, pues con ello incurre en una evidente infracción de las normas superiores comentadas.

Es por lo anterior, que se debe proceder con la dejación sin efectos de los Actos impugnados, en aras de reestablecer el debido proceso transgredido por la Rama Judicial.

❖ **Falta de aplicación del artículo 2 numeral 4 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y del artículo 41. literal g de la ley 1122 de 2007. dentro de las Resoluciones No. DESAJCLR21-2261, DESAJCLR21-2579, RESOLUCIÓN No. RH 033.**

Aunado a lo anterior, de lo actuado por las Direcciones Ejecutivas Nacional y Seccional de Cali, es preciso decir que la Rama Judicial olvidó al expedir las Resoluciones acusadas que las controversias generadas por asuntos relacionados con la seguridad social, regidos por la ley 100 de 1993, solamente pueden ser dirimidos por la especialidad jurisdiccional ordinaria laboral o la Superintendencia Nacional de Salud, haciendo uso de sus facultades jurisdiccionales.

Lo anterior, se encuentra expresamente regulado por la disposición contenida en el numeral 4 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por la Ley 712 de 2001 y la ley 1564 de 2014 quedando así:

“Artículo 2o. Competencia General. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

(...)

4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos.”

Así mismo, el artículo 41 de la ley 1122 de 2007, adicionado por la Ley 1438 de 2011, consagra:

“Ley 1122 de 2007. ARTÍCULO 41. FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.<Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Con el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en ejercicio del artículo 116 de la Constitución Política, la Superintendencia Nacional de Salud podrá conocer y fallar en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez, en los siguientes asuntos:

(...)

g) <Literal adicionado por el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Conocer y decidir sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por parte de las EPS o del empleador”.

Así entonces, no tiene discusión alguna que la jurisdicción ordinaria laboral es la llamada conocer y decidir sobre las controversias referentes al Sistema de Seguridad Social Integral que se

llegaren a suscitar entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, salvo aquellas relacionadas con responsabilidad médica o contratos. Del mismo modo, claro resulta que a petición de parte y en uso de sus facultades jurisdiccionales, también podrá conocer y decidir sobre el reconocimiento y pago de prestaciones económicas, la Superintendencia Nacional de Salud.

En este orden de ideas, es evidente que la competencia para conocer y DECIDIR sobre los asuntos citados está limitada a la justicia laboral o a la Superintendencia Nacional de Salud, de modo que en el *sub examine*, se avizora una clarísima falta de aplicación a lo normado como quiera que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante los Actos acusados, deja entrever que pretende arrogarse la facultad de decidir sobre el reconocimiento y pago de incapacidades y/o licencias de paternidad, con la expedición de una “orden de reintegro”, sin que el valor del mismo se hubiere sometido a contradicción o verificación alguna por parte de mi procurada, de modo que con ello es evidente que usurpa competencias propias de otros entes.

Así las cosas, conviene expresar sobre la facultad legislador para determinar la jurisdicción competente por su especialidad para conocer las controversias sobre seguridad social integral rescatando las discusiones de la Corte Constitucional en la sentencia C1027-02 que expresa lo siguiente:

“4. La facultad del legislador para determinar la jurisdicción competente por su especialidad para conocer las controversias sobre seguridad social integral

Debe la Corte expresar una vez más que la asignación de una competencia en determinada autoridad judicial no es una decisión que exclusivamente esté en cabeza de la Constitución sino que pertenece ordinariamente al legislador, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de determinarla en forma expresa entre los diferentes órganos judiciales, y que al ejercer tal atribución no se desconozcan los mandatos de la Carta Política.

Ha dicho esta Corte en Sentencia C-390 de 2000:

"Como esta Corporación lo ha señalado, el Legislador goza de una amplia libertad para definir la competencia de los funcionarios judiciales, como distribución concreta de la jurisdicción. Esta atribución de competencias es no sólo una facultad propia del Congreso, sino que además cumple un importante papel, pues favorece la seguridad jurídica, en la medida en que quedan claros quienes son los funcionarios que tienen la potestad de llevar a cabo ciertas tareas. Además, de esa manera, la ley precisa las formas propias de cada juicio, que es un requisito para asegurar el debido proceso. En esas condiciones, es una potestad propia de la ley definir el funcionario competente en materia de procesos laborales".

Y en Sentencia C-111 de 2000, expresó:

"...la asignación legal de una competencia a una autoridad judicial supone la determinación acerca del ejercicio de una función pública, en desarrollo del mandato establecido en el artículo 150-23, en virtud del cual corresponde al Congreso de la República "expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas", siendo en este caso la administración de justicia la función pública regulada, la cual de conformidad con lo señalado en el artículo 228 de la Ley Fundamental, constituye materia de ley para su organización y realización, de manera pronta y eficiente".

(...)

De esta forma, el constituyente siguiendo las tendencias contemporáneas, le otorgó a la seguridad social una múltiple dimensión incorporando dentro de su amplio espectro instituciones, principios, mecanismos, garantías y procedimientos administrativos y judiciales. En efecto, en el texto constitucional el concepto de seguridad social tiene carácter onmicomprensivo en tanto y en cuanto abarca distintos aspectos de un mismo fenómeno: la seguridad como servicio público; la organización administrativa de la seguridad social; los principios rectores de la seguridad social; su carácter de derecho irrenunciable; la participación de los particulares en la ampliación y gestión de la seguridad social; las entidades gestoras de la seguridad social; y la garantía de la destinación y aplicación de los recursos de la seguridad social. Y aun cuando no se mencionan expresamente, dentro del concepto constitucional de seguridad social también se entienden incluidos los distintos procedimientos para hacerla efectiva.

Así pues, de acuerdo con la comentada disposición superior el legislador goza de amplia libertad para configurar el régimen jurídico de la seguridad social dentro de los parámetros allí establecidos, libertad que no es absoluta pues la propia Carta establece unos principios básicos que obligatoriamente la orientan y que, por ende, limitan esa la libertad de configuración.

En Sentencia C-1489 de 2000, la Corte expresó:

"Conforme a la Carta, el Legislador juega un papel esencial en el desarrollo y configuración del régimen de seguridad social en salud, pues tal y como esta Corte lo ha destacado, "es al legislador a quien compete regular el servicio público de salud y determinar cuáles entidades del sector público o privado pueden prestarlo, el régimen a que deben sujetarse y todos los demás aspectos atinentes al mismo"[3]. Los derechos a la salud y a la seguridad social son entonces derechos de amplia configuración legal, pues la Constitución ha conferido al Congreso una gran libertad para que defina el alcance de estos derechos y concrete los mecanismos institucionales y los procedimientos para su realización efectiva". (subrayas fuera de texto)

(...).

Ahora bien, la especialidad de cada proceso, derivada de la diferente naturaleza del derecho sustantivo que se ocupa, aconseja, por lógicas razones de especialización, su atribución por parte del legislador a órdenes jurisdiccionales concretos, cuya existencia es plenamente compatible con el principio de unidad jurisdiccional, que no supone un orden jurisdiccional único ni órganos jurisdiccionales uniformes sino, todo lo contrario, permite o aconseja el establecimiento de órdenes y órganos jurisdiccionales diferentes con ámbito competencial propio. Tal es el caso de la seguridad social integral, cuya unidad conceptual -que viene dada desde la propia Constitución y es desarrollada por la Ley 100 de 1993-, sumada a las características propias de la conflictividad que gira en torno a esta materia, demandan la existencia de un proceso especial y de una jurisdicción también especializada en orden a dirimir las controversias que se relacionen con esta materia.

(...)

Inicialmente, el artículo 2° del Código de Procedimiento Laboral de 1948, le atribuyó a la jurisdicción especial del trabajo la competencia para conocer de las controversias, ejecuciones y recursos que le asignaba la legislación sobre el Seguro Social.

Con posterioridad la Ley 362 de 1997, por la cual se modificó el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y se dictaron normas sobre competencia en materia laboral, conservó esta misma regulación al asignar en su artículo 1° a dicha jurisdicción el conocimiento de las controversias, ejecuciones y recursos que le atribuya la legislación sobre el Instituto de Seguro Social, así como el de "las diferencias que surjan entre entidades públicas y privadas, del régimen de seguridad social integral y su afiliados".

(...)

También la Corte consideró, que la competencia entregada en la citada disposición a la jurisdicción ordinaria obedeció al propósito de darle desarrollo a la prestación del servicio público de la seguridad social mediante un régimen jurídico unificado. En este sentido afirmó que la asignación de competencia para la solución de las controversias suscitadas entre las entidades públicas y privadas de la seguridad social integral con sus afiliados, "responde a la necesidad de especializar una jurisdicción estatal con la asignación de dicha competencia, haciendo efectiva la aplicación del régimen jurídico sobre el cual se edificó la prestación del servicio público de la seguridad social". De esta forma igualmente consideró que cuando el artículo 1° de la Ley 362 de 1997 asignó tal competencia a la jurisdicción ordinaria, la acepción "seguridad social integral" allí consignada no puede ir más allá de su órbita para abarcar aspectos que se mantienen en otras jurisdicciones, u otras especialidades de la jurisdicción ordinaria, ya que las diferencias susceptibles de conocimiento de los jueces del trabajo en esta materia, se refieren al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales económicas y de salud establecidas en favor de los afiliados y beneficiarios en la Ley 100 de 1993 y en el decreto 1295 de 1994 a cargo de entidades que conforman el Sistema Integral de Seguridad Social, así como las que se suscitan sobre los servicios sociales

complementarios contemplados en la misma Ley 100 y no las que hacen parte de un sistema de prestaciones a cargo directo de los empleadores públicos y privados, cuya competencia se mantiene en los términos previstos en las leyes anteriores, por cuanto en estricto sentido no hacen parte del dicho Sistema Integral de Seguridad Social.

(...)

Mediante la Ley 712 de 2001, por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo, se perfecciona el gran avance logrado por la Ley 362 de 1997, pues al delimitar el campo de la jurisdicción laboral en el artículo 1° de dicho ordenamiento se anuncia que en adelante el Código Procesal del Trabajo se denominará Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, agregando que los asuntos de que conoce la jurisdicción ordinaria "en sus especialidades laboral y de seguridad social" se tramitarán de conformidad con dicho Código.

Así mismo, en el artículo 2° de la ley en mención se regula la competencia general de la jurisdicción ordinaria "en sus especialidades laboral y de seguridad social", atribuyéndole en su numeral 4° acusado el conocimiento de las controversias referentes al "sistema de seguridad social integral" que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.

De esta forma, queda claro que el nuevo estatuto procesal del trabajo reconoce expresamente la autonomía conceptual que al tenor de lo dispuesto en el artículo 48 Fundamental ha adquirido la disciplina de la seguridad social, asignándole a la jurisdicción ordinaria laboral el conocimiento de los asuntos relacionados con el sistema de seguridad social integral en los términos señalados en el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001.

Los conflictos relacionados con los regímenes de excepción establecidos en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 no fueron asignados por el legislador a la justicia ordinaria laboral, por tratarse de regímenes patronales de pensiones o prestacionales que no constituyen un conjunto institucional armónico, ya que los derechos allí regulados no tienen su fuente en cotizaciones ni en la solidaridad social, ni acatan las exigencias técnicas que informan el sistema de seguridad social integral".

En razón de lo anterior resulta contrario al ordenamiento jurídico aplicar en virtud de una ley (270 de 1996) que ni siquiera hace parte del sistema integral de seguridad social, una competencia que no es propia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, omitiendo por completo, dar valor a la regulación contemplada en el CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO o en la ley 1122 de 2007, para dirimir eventuales conflictos suscitados entre el empleador Rama Judicial y la EPS que represente, respecto al reconocimiento y pago de prestaciones económicas derivadas de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad.

Así entonces, la adjudicación de una función especial propia de otra entidad no es permitida bajo ningún escenario o fundamento en Colombia, aún bajo el presunto criterio de salvaguardar los recursos públicos o garantizar el cobro de un derecho; precisamente, existe un procedimiento especial para elevar estos cobros y no es el uso de una supuesta prerrogativa la llamada a solucionar el conflicto, mediante una “orden de reintegro”, vulneradora de las normas superiores aquí citadas y con ellas del derecho fundamental al debido proceso, que debe salvaguardarse en toda actuación administrativa o judicial. Al respecto se ha pronunciado la Corte Constitucional, indicando:

“Las funciones públicas otorgadas a los órganos del Estado deben estar previamente señaladas en la Constitución, la ley o el reglamento. En consecuencia, cualquiera acción que ejecute un órgano del Estado sin estar previamente indicada en las normas mencionadas constituye una acción inconstitucional, ilegal o irreglamentaria por falta de competencia. Igualmente cualquier acción que provenga de un desbordamiento de la función asignada constituye una extralimitación de la función pública.”⁵

En consecuencia y ante la clara falta de aplicación de las normas señaladas en este punto, se argumenta, uno de los vicios de nulidad contenidos en las resoluciones demandadas.

4. DESVIACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE CALI – VALE DEL CAUCA, COMO QUIERA QUE NO LE ASISTE COMPETENCIA PARA EXPEDIR ORDEN DE PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD O PATERNIDAD, A LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD RESPECTIVAS.

Como primera medida, valga traer a colación el artículo 6 de la Constitución Política, del cual se desprende la prohibición que rodea a los funcionarios públicos, de extralimitarse en el cumplimiento de sus funciones, así pues, es del todo claro que estos últimos están sujetos al estricto cumplimiento del rol que desempeñen en la administración pública, o de lo contrario, al sobrepasarlo incurrirían en una posible responsabilidad, bajo el efecto de que aquellas actuaciones ejecutadas en exceso se tendrían como abiertamente inconstitucionales, ilegales o irregulares.

Ahora bien, la normativa colombiana prevé factores de competencia que ofrecen una serie de criterios que permiten determinar a qué funcionario le corresponde el conocimiento de cada asunto en particular, precisamente, es la misma estructura del Estado la que enseña la especialidad que acompaña a cada una de sus ramas bajo el amparo de la constitución y de la ley para el efectivo desarrollo de sus funciones.

⁵ Corte Constitucional, sentencia C-396 de 2006. Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería.

En esencia, las facultades de los funcionarios públicos no pueden ir más allá de las atribuciones conferidas por la ley, es así que cuando sus actos se encuentran por fuera de sus atribuciones son debatidos inmediatamente.

Lo anterior es anotado como quiera que la resolución en comento aparenta una competencia que no es cierta y ni siquiera atribuible a la dirección seccional de la rama judicial Cali, en efecto, el fundamento jurídico que ampara la expedición del acto administrativo es el contenido en la ley de administración de justicia, más precisamente, la señalada en su artículo 103 numerales 2 y 6 tal como lo indica la resolución, sin embargo, precisa el artículo lo siguiente:

“ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. <Ver Notas del Editor> Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejerger en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes funciones:” (Énfasis propio).

Logra evidenciarse que las atribuciones a través de las cuales se pretende que el acto producido tenga un fundamento legal, pierden su base cuando es la misma disposición la que establece su límite, en otras palabras, las facultades de los Directores Seccionales de la Rama Judicial no pueden ir más allá de las contenidas en el ámbito de su competencia, primera razón para indicar que no podrían estos funcionarios a través de un acto administrativo, abrogarse asuntos que son de conocimiento de la jurisdicción ordinaria o de la Superintendencia Nacional de Salud, teniendo en cuenta que el objeto del acto es una controversia que tiene un contenido específicamente judicial o jurisdiccional.

Se debe recordar que en este caso la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es un órgano técnico y administrativo que hace parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura lo que significa que esta parte de la Rama Judicial no ejerce funciones judiciales, sino que por definición, desempeña funciones administrativas encaminadas a lograr el buen funcionamiento de las seccionales de dicha rama del poder público, mismas que de ninguna manera le es dable exceder.

Todo esto es traído a colación porque el acto demandado infringe el procedimiento establecido en el artículo 24 del decreto 4023 de 2011 y especialmente lo señalado en el artículo 2, numeral 4 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y el artículo 41, literal g de la ley 1122 de 2007. Disposiciones que establecen lo siguiente en su orden:

“Artículo 24. Pago de prestaciones económicas. A partir de la fecha de entrada en vigencia de las cuentas maestras de recaudo, los aportantes y trabajadores independientes, no podrán deducir de las cotizaciones en salud, los valores correspondientes a incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad y/o paternidad.

El pago de estas prestaciones económicas al aportante, será realizado directamente por la EPS y EOC, a través de reconocimiento directo o transferencia electrónica en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la autorización de la

prestación económica por parte de la EPS o EOC. La revisión y liquidación de las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas se efectuará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud del aportante.

En todo caso, para la autorización y pago de las prestaciones económicas, las EPS y las EOC deberán verificar la cotización al Régimen Contributivo del SGSSS, efectuada por el aportante beneficiario de las mismas.” (Énfasis propio)

Obsérvese entonces, la clara desatención por parte de la Rama Judicial frente al trámite descrito, encaminado a obtener el reconocimiento y cobro de prestaciones económicas. Ahora bien, por otra parte, es preciso reiterar que, en el evento de generarse un conflicto derivado del asunto en cuestión, a quien corresponderá dirimirlo, en virtud de las normas enunciadas, será a la jurisdicción ordinaria laboral o a la Superintendencia Nacional de Salud, veamos:

“Código de Procedimiento Laboral y de Seguridad Social. Artículo 2o. Competencia General. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

(...)

4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos.”

“Ley 1122 de 2007. ARTÍCULO 41. FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.<Artículo CONDICIONALMENTE exequible>

Con el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en ejercicio del artículo 116 de la Constitución Política, la Superintendencia Nacional de Salud podrá conocer y fallar en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez, en los siguientes asuntos:

(...)

g) <Literal adicionado por el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Conocer y decidir sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por parte de las EPS o del empleador”.

En efecto no hacen parte de las funciones de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la posibilidad de dirimir conflictos suscitados por asuntos atinentes a la seguridad social; consecuentemente, no resulta correcto indicar que la administración de los bienes y recursos destinados al funcionamiento de la rama judicial, involucre la realización de ordenes y/o ejecuciones que omiten los procedimientos establecidos por el legislador para los asuntos o materias especiales.

Así pues, resulta violatorio de la competencia que le es asignada a un funcionario, aprovecharse de una prerrogativa pública para obligar a un tercero con el reembolso inmediato de prestaciones económicas, toda vez que si bien es cierto se podría estar persiguiendo un derecho que eventualmente legítimo, no es menos cierto que el medio destinado para ello no es jurídicamente válido, porque precisamente no toda prestación económica pagada debe ser reconocida por el solo hecho del pago alegado por el empleador, pues si así ocurriera, el sistema colapsaría al no verificar los requisitos que acreditan su viabilidad para que opere el reconocimiento de dichas sumas.

En este orden de cosas, resulta acertado indicar que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali excedió su competencia, al proferir la Resolución No. DESAJCLR 21-2261, mediante la cual, ordenó a mi procurada EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A., el pago de prestaciones económicas derivadas de incapacidades y licencias de maternidad o paternidad, causadas por funcionarios de la Rama Judicial, durante las vigencias 2017 y 2018, pues su facultad se limita a GESTIONAR EL RECONOCIMIENTO de ellas por parte de la EPS, haciendo uso de los trámites legales establecidos, pero de ninguna manera se extiende a la posibilidad de ordenar un pago arbitrario, sin que ello se someta verificación alguna por parte de la llamada al pago.

Por lo anterior, es preciso señalar, que nos encontramos ante la configuración flagrante de nulidad frente a los Actos acusados.

JURAMENTO

En representación de la sociedad **EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.**, respetuosamente me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que no se ha presentado demanda o solicitud alguna por los mismos hechos y pretensiones.

COMPETENCIA Y CUANTÍA

La competencia para conocer el presente asunto corresponde a los jueces administrativos de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta que el ente que profirió los actos administrativos que se pretenden demandar es la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali.

Así mismo, son competentes estos jueces administrativos, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que, la cuantía de las pretensiones no supera los 500 S.M.L.M.V.

La presente demanda deberá tramitarse por el Procedimiento establecido en la PARTE SEGUNDA “*Organización de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de sus funciones Jurisdiccionales y Consultivas*” CAPITULO V “*Demanda y proceso Contencioso Administrativo*” de la ley 1437 de 2011.

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

La cuantía se estima razonadamente en la suma de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS (\$28.643.187) M/Cte., correspondiente al monto constitutivo de orden de pago expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, mediante la Resolución DESAJCLR21-2261, confirmada por las Resoluciones DESAJCLR21-2579 y RH 033., expedidas por la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial.

RELACIÓN PROBATORIA

- **Pruebas documentales aportadas**

Presento a usted los siguientes documentos, para que sean tenidos como pruebas dentro de la diligencia:

1. Copia de la Resolución No. DESAJCLR21-2261, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali.
2. Copia del recurso de reposición formulado por EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A., contra la Resolución la Resolución No. DESAJCLR 19-174.
3. Copia de la Resolución No. DESAJCLR21-2579, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición formulado contra la Resolución No. DESAJCLR 21-2261.
4. Copia de la solicitud de conciliación extrajudicial, radicada ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali.
5. Copia de la solicitud de conciliación extrajudicial, radicada ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
6. Constancia de haber agotado el requisito de procedibilidad.

ANEXOS

- Todos los documentos aducidos como prueba en el acápite anterior.
- Copia del certificado de existencia y representación legal de EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.
- Copia del poder que me faculta para representar a EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A., en el presente asunto.

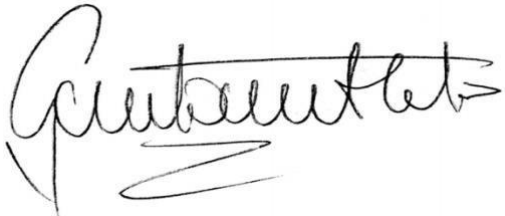
NOTIFICACIONES

Al suscrito apoderado en la Avenida 6A bis # 35n – 100, oficina 212 Centro Empresarial Chipichape de la ciudad de Cali. Para efectos de notificación electrónica, según lo previsto en el art. 162 Núm. 7 del CPACA, la dirección electrónica es: notificaciones@gha.comc.o

A la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, en la Carrera 10 No. 12-15 piso 17, Palacio Nacional de Justicia “Pedro Elías Serrano Abadía”, Cali, Valle del Cauca. Tel (2) 898 68 68, ext. 1406.

Su dirección electrónica es: dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gustavo Alberto Herrera Avila', with a stylized flourish at the end.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.